

+CON LOS ATAQUES A CABLE COLOR

BUSCAN CALLAR DOS MEDIOS DE UN SOLO TIRO

El ataque a la empresa Cable Color en horas de la mañana en Tegucigalpa, tiene el objetivo de callar dos medios de un solo tiro. Por un lado atacar la posición y cobertura de Diario Tiempo y Canal 11; y por el otro cortar la señal de Radio Globo y Canal 36, quienes compran servicios de red a la empresa del Grupo Continental.

El abogado y miembro de los Abogados en Resistencia, Nefalí Rodezno estaba presente en las instalaciones de Cable Color, asegurando que lo que "estamos viviendo es una violación a la libertad de expresión", suponiendo con ello una nueva demanda contra el Estado de Honduras, a nivel interna-

cional, debido a la poca credibilidad de las autoridades del poder judicial. "Se están ensañando contra la libertad de expresión y sabemos que los ojos del mundo están puestos en lo que se haga en Honduras, es por eso que estamos recogiendo información para entablar las acciones correspondientes ya que evidentemente todos los actos que se cometan contra las personas o empresas por este gobierno de facto, son ilegales y arbitrarios", dijo Rodezno.

"Con esto se busca callar a los únicos medios que informan, y como los otros (medios de comunicación), no dicen nada a ellos no los atacan", enfatizó Rodezno, con un tono de indig-



Hasta la fecha sólo cuatro son los medios que informan de lo que pasa en el país.



Con el cierre de Radio Globo y canal 36 se limita la información a la población.

nación. Hasta la fecha se desconoce la resolución judicial que llevó a fiscales y agentes del Ministerio Público a cortar la señal, que dejaría a radio Globo y Canal 36 con una cobertura muy reducida, lo que "es un golpe a la resistencia y esto abre el camino para la represión", puntualizó Rodezno.

El Gerente de la empresa Cable Color, Jesús Torres manifestó que lo ocurrido es una arbitrariedad, porque con esta acción se le quitaba el servicio de cable a miles de personas y además no se han seguido los canales

adecuados, "nosotros no tenemos la resolución judicial y ellos (los jueces y fiscales), no saben lo que andan buscando, ya que ni siquiera reconocen lo que es tráfico gris", detalló.

Desde el primer día del golpe de Estado, Canal 36 y Radio Globo, han sido duramente tratadas por este gobierno de facto, se militarizaron, atacaron sus transmisores y ahora, dando el toque de gracia, atacan a su proveedor de red, con lo que eliminan a dos medios, que se habían convertido en una piedra en el zapato para el régimen de facto.

+¿CUÁL INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL?

PERSIGUEN A LOS JUECES POR DAR OPINIONES JURÍDICAS

La ley que regula la actividad de los jueces les restringe poder opinar en asuntos políticos, sin embargo no les limita para emitir posturas jurídicas en torno a determinados casos, esto ha llevado al Abogado y Juez de sentencia, Ramón Barrios, a denunciar nacional e internacionalmente la persecución, que según él, existe dentro del poder judicial.

"Yo lamento lo que al interior del poder Judicial está sucediendo. Nosotros en nuestra condición de jueces de sentencia, estamos

siendo perseguidos por órdenes superiores, porque hemos tomado una posición jurídica y no política en la crisis que vive Honduras" dijo Barrios, señalando que "todas las opiniones las hemos dado en nuestra condición de profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, UNAH-VS".

El Juez detalló que la persecución no es a todos los jueces, sino a aquellos que han señalado que no existió la Sucesión Constitucional el 28 de junio,

cuando los militares sacaron de su vivienda al Presidente Manuel Zelaya. Todo parece indicar que esta persecución puede concluir con un despido, lo que no extrañaría al catedrático universitario, sin embargo su posición está en función del pueblo, "porque es al que nos debemos".

OTROS CASOS

La jueza de Letras de lo Penal, Maritza Arita, es otra de las juezas que ha denunciado, estar siendo sujeta de persecución política y de una campa-

ña para denigrar su imagen pública por aplicar medidas sustitutivas a 3 personas supuestamente acusadas de protagonizar actos vandálicos, incendio agravado y terrorismo contra la propiedad privada.

Arita mencionó, que "tomé una decisión y dicté un auto conforme a derecho". Añadió que las medidas que se dictan no son una presunción de inocencia, sino que éstas tienen la finalidad de garantizar la presencia del imputado en el proceso y también regular las fuentes de prueba.

NUESTRA PALABRA

LA DIGNIDAD NO SE COMPRA

Una comunidad rural del Valle de Sula, típicamente empobrecida como las de nuestro campo hondureño, ha dedicado enormes esfuerzos en la construcción de un edificio para la atención pre-escolar de las niñas y niños. Ya tienen el edificio, y ahora realizan actividades para recaudar fondos con el fin de comprar el equipamiento básico para el funcionamiento de las actividades educativas.

La esposa de uno de los candidatos del bipartidismo en este proceso electoral que busca legitimar el golpe de estado, se hizo presente en la comunidad, y al enterarse de las necesidades de la niñez, se dispuso a enviar el equi-

pamiento por el que la organización comunitaria realiza enormes y difíciles esfuerzos económicos.

La refrigeradora, la estufa, otros utensilios de cocina y algunos muebles están allí en la comunidad. Antes de desempacar los mismos, la directiva de la organización comunitaria convocó a los pobladores para tomar una decisión sobre el uso de aquellos equipos tan necesarios para la actividad educativa de la niñez.

Después de debatir el tema, la comunidad, tradicionalmente liberal o cachureca, como es propio de las comunidades de nuestros paisajes rurales, decidió no abrir ninguno de los equipos, y

exige que la esposa del candidato regrese a recoger los mismos, porque los vecinos han dicho que ya se pasó el tiempo cuando los políticos les compraban su voto con regalías y limosnas.

Uno de los vecinos dijo las cosas con mayor firmeza: “Los políticos siguen creyendo que aquí en Honduras no ha pasado nada, y que nosotros los pobres seguimos siendo los mismos. Pero están muy equivocados, porque una vez que nosotros hemos experimentado lo valioso de la lucha por la dignidad, ningún político que busca traficar con nuestras necesidades nos hará echar marcha atrás”. El proceso electoral está ati-

borrado de una publicidad sin precedentes promovida por los grandes propietarios de los partidos políticos y por quienes avalan el régimen de facto. Sin embargo, las elecciones podrán cambiar nombres y rostros en el gobierno, pero dejarán muy bien instalado el conflicto que sólo se resuelve con el retorno a la constitucionalidad.

Por muy grande que sea la campaña publicitaria, el proceso electoral ni está siendo reconocido por la comunidad internacional, ni está siendo avalado por las comunidades que, como la referida, lucha pobremente, antes que vender su dignidad por unas cuantas regalías.

+SEGÚN LETICIA SALOMÓN

LA OPOSICIÓN AL GOLPE DE ESTADO SE CONVIRTIÓ EN FUERZA SOCIAL

La Directora de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Leticia Salomón, sostiene que nadie previó la amplia oposición al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, producido el 28 de junio de 2009. Ahora, después de más de dos meses, el país está en gran medida aislado de la comunidad internacional y diversos sectores de la sociedad hondureña siguen protestando a diario en las calles. Como resultado de ello, Salomón estima que los costos para los conspiradores golpistas se han convertido en una carga demasiado pesada.

La socióloga y economista se resiste a especular sobre cómo el régimen golpista podría caer, a la vez que expresa preocupaciones frente a la mayor participación de militares y sectores empresariales en los asuntos políticos; pero, dice: “Hay un hecho que es cierto, no se puede mantener este gobierno hasta noviembre, al día de las elecciones. Y no se va a mantener por varias razones. No solamente por la protesta social que está en las calles”, sino porque choca con los intereses de los empresarios y de los políticos”.

En su opinión, el sector empresarial de Honduras jugó un papel clave en el golpe de Estado. Aquellos empresarios “que pensaban que un golpe de Estado era cuestión de miles de dólares y nada más, ya llevan miles y millones invertidos en esto. Y no solamente de dinero que han sacado de su bolsillo, sino del impacto económico de la toma de carreteras, de los paros, y de la huelga. Los mismos empresarios reconocen que eso ha sido terrible para ellos y por eso, un fuerte sector de empresarios ha empezado a presionar para que le encuentren una salida, porque ya han llegado al límite de lo aceptable del costo económico del golpe”.

Pero más allá de haber estorbado los planes golpistas, Salomón añade que la amplia resistencia nacional al golpe de Estado está generando una nueva “fuerza social” en el país, con la que cualquier futuro gobierno tendrá que lidiar.

En una entrevista con ALAI, realizada el 31 de agosto de 2009, esta investigadora, quien trabaja también en el Centro de Documentación de Hondu-



ras, habla sobre los intereses que están detrás de la expulsión de Zelaya, identificados con políticos, grandes empresarios y las Fuerzas Armadas. También se refiere a las tensiones adicionales que pudieran provocar el ocaso del apoyo al régimen de facto.

EL DETONANTE POLÍTICO

El mismo día en que el presidente Zelaya fue derrocado, se iba a realizar un sondeo de opinión nacional para preguntar al electorado si quería que se realice un referéndum en las próximas elecciones, sobre si debía o no instaurarse una Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la Constitución

política del país. Tras la votación, el Congreso aún habría tenido que aprobar el referéndum y una asamblea nacional no podía instalarse antes de la toma de mando del nuevo gobierno. Los partidarios del golpe alegan, sin embargo, que Zelaya buscaba una enmienda constitucional que le permitiría buscar la reelección y que ello constituía una infracción. Salomón observa, sin embargo, que hay diversos grupos que se interesaban en las reformas constitucionales, incluyendo, inicialmente, el actual candidato presidencial del Partido Nacional, uno de los dos partidos tradicionales en Honduras.

+EN REUNIÓN SECRETA

PLANIFICAN BOICOTEAR PACTO DE SAN JOSÉ

Muy al estilo de los gánster en Honduras, es a través de componendas secretas donde se resuelven los problemas y además en donde se planifica la solución de los mismos. El Golpe de Estado, planificado por la cúpula empresarial y política hoy es el tema de discusión en reuniones secretas de cuatro candidatos que aspiran la presidencia, indicaron miembros del gobierno de Manuel Zelaya.

“Denunciamos que en reuniones secretas, con Carlos Flores, Luís Alberto Rubí de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Ricardo Álvarez, Arturo Corrales junto a los candidatos del Partido Liberal, Partido Nacional, PINU y la Democracia Cristiana, se llegó al compromiso de boicotear el plan Arias, negándose a la restitución de Manuel Zelaya”, dijo Enrique Flores Lanza, miembro del gabinete derrocado.

Lanza destacó la participación de Carlos H Reyes y César Ham, únicos candidatos que se han negado a participar en las elecciones, sin el restablecimiento del orden constitucional, “queremos que el pueblo se



El Pacto de San José está casi muerto y limita la participación del pueblo.

mantenga firme en esta lucha para sacar al régimen de facto”, detalló.

Por su parte Porfirio Lobo, aspirante presidencial declaró que “nosotros nos comprometimos a dialogar para que se continúe con el diálogo y lógicamente es un diálogo donde pueden haber algunas consideraciones, cam-

bios en lo que es la propuesta original”, declaró Porfirio Lobo.

Manuel Zelaya Rosales, presidente derrocado, dijo tener un plan alternativo para su ingreso al país, sin “tenemos planificación alternativa con el pueblo y con la comunidad internacional, y se van a arreciar más las medidas,

porque el mundo no acepta un golpe de Estado en el siglo XXI”, señaló.

Algunos analistas como Álvaro Cáliz, mantienen algunas dudas de una solución pacífica y asegura que el acuerdo de San José está casi fallecido, “a pesar de la lucha interna y del respaldo internacional, esta difícil una salida, porque esta elite se ha apropiado del poder y esto implica que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias: a la violencia a matar y por lo tanto eso supone que no hay un plano de negociación posible”.

Para Cáliz, de llegar a ceder al acuerdo de San José, única propuesta de la comunidad internacional, “sería por la presión económica, sobre todo, la que se haga contra el grupo empresarial que ha apoyado el golpe”, este analista reconoce la importancia de la presión interna, pero esta sirve “para mostrar que este gobierno no es legítimo, está claro que las luchas pacíficas no tienen el nivel de presión que podrían tener otras medidas”, puntualizó.

+EL PROYECTO DEBE SER ADOPTADO ANTES DEL 2 DE OCTUBRE

AMÉRICA LATINA QUIERE QUE ONU CONTROLE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

Fuente: AFP noamericano a la AFP.

Los países de América Latina y el Caribe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra proponen crear un mecanismo de control de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, según un proyecto de resolución a cuyo contenido tuvo acceso la AFP.

“Queremos que la resolución sea adoptada por consenso y ya hemos iniciado consultas con los demás grupos regionales para que un grupo de expertos de la ONU, o la propia Alta Comisionada, Navanethem Pillay, apliquen los mecanismos de vigilancia sobre las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en Honduras”, precisó un embajador lati-

noamericano a la AFP. El texto denuncia el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti así como las transgresiones a las libertades de expresión y libre circulación.

También cuestiona los ataques contra periodistas, jueces y defensores de los derechos humanos, insistiendo en condenar el golpe de Estado del 28 de junio pasado que destituyó al presidente constitucional, José Manuel Zelaya.

Una de las posibilidades que contempla el documento, es enviar a Honduras una misión compuesta por los Relatores Especiales de la ONU encargados de la independencia de

jueces y magistrados, así como de los defensores de los derechos humanos.

Integrado por 47 Estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, según una repartición regional rotativa anual, el Consejo acoge este año, por América Latina y el Caribe, a Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, México, Nicaragua y Uruguay.

A iniciativa de México, secundado por Argentina, el proyecto de resolución ya ha conseguido el apoyo de los demás grupos regionales, de Asia, África, Europa del Este y países occidentales.

El proyecto debería ser adoptado antes del fin de la actual sesión del Consejo, el próximo 2 de octubre, según fuentes diplomáticas.

